



SALA UNIPERSONAL DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	Verbal – Nulidad de contrato
DEMANDANTES	Oscar Fernando Giraldo Osorio y otra
DEMANDADO	Ángela María Giraldo Osorio
RADICADO	05001 31 03 018 2022 00458 01
DECISIÓN	Confirma auto apelado

Medellín, treinta de agosto de dos mil veintitrés

El Despacho resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en el asunto de la referencia.

ANTECEDENTES

1.1. En providencia de 29 de mayo de 2023 el Juzgado 018 Civil del Circuito de Medellín admitió la demanda incoada por Oscar Fernando y Silvia Elena Giraldo Osorio, frente a Ángela María Giraldo Osorio. En dicha providencia, el despacho concedió a los demandantes el término de quince (15) días contados a partir de la ejecutoria de la providencia, para gestionar la notificación a la accionada. De igual modo, señaló que previo a resolver sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada, con fundamento en lo previsto en el artículo 590 del C.G.P., los accionantes debían prestar caución por \$100 000 000 que garantizara los eventuales perjuicios que se llegare a ocasionar a la demandada y a terceros.

1.2. Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de los promotores de la demanda, presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, con el objetivo de que la carga procesal de notificar a la parte demandada fuera revocada mientras no se perfeccionara en debida forma la medida cautelar solicitada; de igual modo, pidió que la decisión de imponer caución para la práctica de medidas cautelares se repusiera hasta cuando se resolviera de fondo la procedencia de las mismas. Subsidiariamente, solicitó se concediera la alzada.

Con ese propósito sostuvo que, en el caso concreto la imposición de la carga de notificar a la parte demandada, en los 15 días posteriores a la ejecutoria del

auto que admite la demanda, no procede, porque, si bien el juez tiene amplias facultades para dirigir el proceso, se estima que dicha imposición puede afectar la efectividad del proceso, pues esta implica notificar a la señora Giraldo Osorio, antes de que la medida cautelar se perfeccione. Adicionalmente, anotó que si bien el requerimiento efectuado por el despacho, no fue hecho en aplicación de la figura del desistimiento tácito, debido a que, dicha figura representa un caso análogo al requerimiento en cuestión, en aplicación de la norma de interpretación de vacíos procesales, dispuesta en el artículo 12 del C.G.P., se aplica por analogía la imposibilidad de requerir la notificación de la demandada, cuando se encuentre pendiente la práctica de una medida cautelar.

De otra parte, en relación con la caución ordenada adujo que esta tiene la finalidad de salvaguardar los perjuicios que pueda ocasionar la práctica de una medida cautelar y, por ende, la misma debe fijarse cuando se decrete. En este sentido, precisó que el decreto y la práctica de una medida cautelar, son oportunidades procesales distintas, la práctica de estas es la que se supedita al pago o no de la caución que se debe fijar al momento de decretarlas.

1.3. En proveído de 26 de junio de 2023 el Juzgado 018 Civil del Circuito de Medellín resolvió el recurso de manera desfavorable, por lo cual, mantuvo incólume lo resuelto y concedió la alzada.

Las razones de la decisión se centraron en que la integración del contradictorio, es una carga que se impuso con la finalidad de que el procedimiento se agote de manera ágil, célere y en los términos establecidos en el C.G.P., además de dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 42 ibídem. Del mismo modo, advirtió que el requerimiento efectuado no llevaba aparejado consigo una sanción o consecuencia a su incumplimiento, de allí, que no podía ser equiparado con el requerimiento previo a la terminación por desistimiento tácito, máxime cuando, el término otorgado a la parte para cumplir la carga procesal, es un término judicial y no legal.

Respecto de la caución impuesta, determinó que el legislador de manera categórica estableció que en los procesos declarativos una condición antecedente para acceder al decreto de las medidas cautelares, es la caución, la cual resulta ser imperativa y de obligatorio cumplimiento.

CONSIDERACIONES

2.1. El artículo 321 del Código General del Proceso establece las decisiones que son susceptibles de ser recurridas vía apelación. Al respecto, la norma en cita señala:

"ARTÍCULO 321. PROCEDENCIA. Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en equidad.

También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:

1. El que rechace la demanda, su reforma o la contestación a cualquiera de ellas.

...

8. El que resuelva sobre una medida cautelar, o fije el monto de la caución para decretarla, impedirla o levantarla.

..."

2.2. Por otra parte, el numeral 2 del artículo 590 ibídem, prevé la caución para el decreto de las medidas cautelares.

"ARTÍCULO 590. MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESOS DECLARATIVOS. En los procesos declarativos se aplicarán las siguientes reglas para la solicitud, decreto, práctica, modificación, sustitución o revocatoria de las medidas cautelares:

...

2. Para que sea decretada cualquiera de las anteriores medidas cautelares, el demandante deberá prestar caución equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones estimadas en la demanda, para responder por las costas y perjuicios derivados de su práctica. Sin embargo, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá aumentar o disminuir el monto de la caución cuando lo considere razonable, o fijar uno superior al momento de decretar la medida. No será necesario prestar caución para la práctica de embargos y secuestros después de la sentencia favorable de primera instancia."

2.3. En relación con la caución para el decreto de las medidas cautelares, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia STC3917 de 2020 señaló lo siguiente:

"Realizando una comparación entre el anterior Estatuto Adjetivo Civil y el actual, frente al tema de la inscripción de la demanda, observamos que ambas normas establecen tres únicos presupuestos para su decreto en procesos como el aquí estudiado: i) la existencia de una pretensión donde se persiga el resarcimiento de perjuicios ocasionados por la responsabilidad endilgada, sea contractual o extracontractual o cualquiera de las solicitudes determinadas en el art. 590 literales a y b; ii) que el bien sujeto a registro sea de propiedad del demandado; y iii) el pago de una caución con la cual se asegure el menoscabo eventualmente causado por la práctica de la medida."

CASO EN CONCRETO

El recurso formulado plantea resolver si el juez de primer grado tuvo razón al requerir a la parte demandante para que, en el término de 15 días posteriores a la ejecutoria del auto admisorio, notificara a la parte demandada; y si acertó en ordenar que se prestara caución, previo al decreto de la medida cautelar solicitada.

Al respecto, conviene hacer algunas precisiones en cuanto a la procedencia del recurso de alzada y en este sentido, se advierte que la decisión relativa al requerimiento para la notificación a la parte demandada es susceptible del recurso de reposición, pero no de apelación, pues de conformidad con el principio de taxatividad y de acuerdo con lo previsto en el artículo 321 del C.G.P., no está comprendido en el listado de dicha norma ni en disposición especial. Por lo tanto, lo resuelto en torno al requerimiento efectuado no puede ser impugnado por esta vía.

Así las cosas, el despacho pasa a analizar lo concerniente a la caución ordenada por el juzgado de primer nivel para el decreto de la medida cautelar de inscripción de la demanda que el extremo procesal demandante solicitó sobre el bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 01N-47664 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Norte, cuya propietaria es Ángela María Giraldo Osorio y respecto del cual se evidencia que mediante

Escritura Pública 2931 de 16 de diciembre de 2020 de la Notaría 021 del Círculo de Medellín, se suscribió contrato de compraventa por un valor de \$200 000 000.

Al respecto se tiene que, mediante auto de 29 de mayo de 2023, el juzgado de instancia ordenó que previo a resolver sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada, los gestores de la demanda debían prestar caución por valor de \$100 000 000, de conformidad con lo establecido en el artículo 590 del Código General del Proceso. La parte recurrente argumentó que la caución se debía fijar una vez que la medida fuera decretada porque se requiere para que esta sea practicada, de modo que no había lugar a ordenar que esta se prestara antes de ser decretada y como soporte de tal censura transcribió la norma ya mencionada que establece las reglas para la solicitud, decreto, práctica, modificación, sustitución o revocatoria de las medidas cautelares.

Sobre el momento del decreto de la medida ocurre que precisamente el texto de la norma señala: *"Para que sea decretada cualquiera de las anteriores medidas cautelares, el demandante deberá prestar caución..."* es decir que la caución se requiere para que la medida pueda ser decretada y no como el recurrente sugiere en cuanto a que la prestación de esa garantía se debe diferir para el momento en que la medida ha sido decretada, luego el reproche formulado carece de soporte legal, por lo que, en el aspecto del otorgamiento de la caución en forma previa al decreto, la decisión debe ser confirmada.

Por otra parte, lo que sí se aprecia sin dificultad en la orden judicial emitida es que el monto de la caución fijada excede el porcentaje establecido para la caución, pues se señaló un 50% del valor estimado de la pretensión y no del 20% como la norma señala, sin que el juez hubiera indicado razón alguna de su proceder de manera que el recurso permite hacer el ajuste del valor previsto en el numeral 2 de la mencionada disposición, cuya finalidad es la de responder por las costas y perjuicios derivados de su práctica. De acuerdo con esto, la decisión del despacho de primer grado, debe ser modificada, pues se busca la declaratoria de nulidad del contrato de compraventa contenido en la Escritura Pública No. 2931 de 16 de diciembre de 2020, en el cual se consignó un precio de \$200 000 000, de manera que sobre este valor se avizora razón para incrementar o disminuir dicha proporción.

En conclusión, el ordinal sexto del auto de 29 de mayo de 2023 proferido por el Juzgado 018 Civil del Circuito de Medellín, será modificado en el sentido de que la caución que la parte demandante debe prestar en forma previa al decreto de la medida cautelar solicitada es de \$40 000 000^{oo}.


Por lo expuesto, el Despacho RESUELVE:

PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE el recurso de apelación en lo que tiene que ver con el requerimiento para la notificación de la parte demandada.

SEGUNDO. MODIFICAR la decisión adoptada en el ordinal sexto del auto de 29 de mayo de 2023, en el sentido de que la parte demandante debe prestar caución por valor de \$40 000 000, previo al decreto de la medida cautelar solicitada y CONFIRMAR en lo demás el auto recurrido.

TERCERO. Sin condena en costas de este recurso porque no se causaron.

NOTIFÍQUESE


MARTHA CECILIA LEMA VILLADA
Magistrada